

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

G/SG/N/1/ARG/2

25 de marzo de 1996

(96-1065)

Comité de Salvaguardias

Original: español

## NOTIFICACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

### ARGENTINA

Se ha recibido de la Misión Permanente de la Argentina la siguiente comunicación, de fecha 4 de marzo de 1996.

#### LEY 24.425

Apruébase el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech.

Sancionada: 7 de diciembre de 1994.

Promulgada: 23 de diciembre de 1994.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1º. Apruébase el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus cuatro (4) Anexos, suscritos en Marrakech -Reino de Marruecos- el 15 de abril de 1994, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente Ley.

Artículo 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. - ALBERTO R. PIERRI. - ORALDO BRITOS. - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. - Edgardo Piuizzi.

Dada en sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro.

### ACTA FINAL EN QUE SE INCORPORAN LOS RESULTADOS DE LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

1. Habiéndose reunido con objeto de concluir la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, los representantes de los gobiernos y de las Comunidades Europeas, miembros del Comité de Negociaciones Comerciales, convienen en que el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en la presente Acta Final "Acuerdo sobre la OMC"), las Declaraciones y Decisiones Ministeriales y el Entendimiento relativo a los compromisos en materia

de servicios financieros, anexos a la presente Acta, contienen los resultados de sus negociaciones y forman parte integrante de esta Acta Final.

2. Al firmar la presente Acta Final los representantes acuerdan:

- a) someter, según corresponda, el Acuerdo sobre la OMC a la consideración de sus respectivas autoridades competentes con el fin de recabar de ellas la aprobación de dicho Acuerdo de conformidad con los procedimientos que correspondan; y
- b) adoptar las Declaraciones y Decisiones Ministeriales.

3. Los representantes convienen en que es deseable que todos los participantes en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales (denominados en la presente Acta Final "participantes") acepten el Acuerdo sobre la OMC con miras a que entre en vigor el 1° de enero de 1995, o lo antes posible después de esa fecha. No más tarde de finales de 1994, los Ministros se reunirán, de conformidad con el párrafo final de la Declaración Ministerial de Punta del Este, para decidir acerca de la aplicación internacional de los resultados y la fecha de su entrada en vigor.

4. Los representantes convienen en que el Acuerdo sobre la OMC estará abierto a la aceptación como un todo, mediante firma o formalidad de otra clase, de todos los participantes, de conformidad con su artículo XIV. La aceptación y entrada en vigor de los acuerdos comerciales plurilaterales incluidos en el Anexo 4 del Acuerdo sobre la OMC se regirán por las disposiciones de cada acuerdo comercial plurilateral.

5. Antes de aceptar el Acuerdo sobre la OMC, los participantes que no sean partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio deberán haber concluido las negociaciones para su adhesión al Acuerdo General y haber pasado a ser partes contratantes del mismo. En el caso de los participantes que no sean partes contratantes del Acuerdo General en la fecha del Acta Final, las listas no se consideran definitivas y se completarán posteriormente a efectos de la adhesión de dichos participantes al Acuerdo General y de la aceptación por ellos del Acuerdo sobre la OMC.

6. La presente Acta Final y los textos anexos a la misma quedarán depositados en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que remitirá con prontitud copia autenticada de los mismos a cada participante.

Hecha en Marrakech el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo cada texto igualmente auténtico.

#### DECISIONES, DECLARACIONES Y ENTENDIMIENTO MINISTERIALES

#### DECISIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS

Los Ministros,

Reconociendo la difícil situación en la que se encuentran los países menos adelantados y la necesidad de asegurar su participación efectiva en el sistema de comercio mundial y de adoptar nuevas medidas para mejorar sus oportunidades comerciales;

Reconociendo las necesidades específicas de los países menos adelantados en la esfera del acceso a los mercados, donde el mantenimiento del acceso preferencial sigue siendo un medio esencial para mejorar sus oportunidades comerciales;

Reafirmando el compromiso de dar plena aplicación a las disposiciones concernientes a los países menos adelantados contenidas en los párrafos 2 d), 6 y 8 de la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo;

Teniendo en cuenta el compromiso de los participantes enunciado en la sección B, párrafo vii), de la Parte I de la Declaración Ministerial de Punta del Este;

1. Deciden que, si no estuviera ya previsto en los instrumentos negociados en el curso de la Ronda Uruguay, los países menos adelantados, mientras permanezcan en esa categoría, aunque hayan aceptado dichos instrumentos y sin perjuicio de que observen las normas generales enunciadas en ellos, sólo deberán asumir compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio, o con sus capacidades administrativas e institucionales. Los países menos adelantados dispondrán de un plazo adicional de un año, contado a partir del 15 de abril de 1994, para presentar sus listas con arreglo a lo dispuesto en el artículo XI del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

2. Convienen en que:

- i) Se garantizará, entre otras formas, por medio de la realización de exámenes periódicos, la pronta aplicación de todas las medidas especiales y diferenciadas que se hayan adoptado en favor de los países menos adelantados, incluidas las adoptadas en el marco de la Ronda Uruguay.
- ii) En la medida en que sea posible, las concesiones NMF relativas a medidas arancelarias y no arancelarias convenidas en la Ronda Uruguay respecto de productos cuya exportación interesa a los países menos adelantados podrán aplicarse de manera autónoma, con antelación y sin escalonamiento. Se considerará la posibilidad de mejorar aún más el SGP y otros esquemas para productos cuya exportación interesa especialmente a los países menos adelantados.
- iii) Las normas establecidas en los diversos acuerdos e instrumentos y las disposiciones transitorias concertadas en la Ronda Uruguay serán aplicadas de manera flexible y propicia para los países menos adelantados. A tal efecto se considerarán con ánimo favorable las preocupaciones concretas y motivadas que planteen los países menos adelantados en los Consejos y Comités pertinentes.
- iv) Al aplicar medidas para paliar los efectos de las importaciones y otras medidas a las que se hace referencia en el párrafo 3 c) del artículo XXXVII del GATT de 1947 y en la correspondiente disposición del GATT de 1994 se prestará especial consideración a los intereses exportadores de los países menos adelantados.
- v) Se procederá a acrecentar sustancialmente la asistencia técnica otorgada a los países menos adelantados con objeto de desarrollar, reforzar y diversificar sus bases de producción y de exportación, con inclusión de las de servicios, así como de fomentar su comercio, de modo que puedan aprovechar al máximo las ventajas resultantes del acceso liberalizado a los mercados.

3. Convienen en mantener bajo examen las necesidades específicas de los países menos adelantados y en seguir procurando que se adopten medidas positivas que faciliten la ampliación de las oportunidades comerciales en favor de estos países.

LEY N° 19.549

Buenos Aires, 3.4.72

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN  
ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA  
CON FUERZA DE LEY:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

TÍTULO I

Procedimiento administrativo: ámbito de aplicación

Artículo 1. Las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos:

Requisitos generales: impulsión e instrucción de oficio

- a) impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones;

Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites

- b) celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, quedando facultado el Poder Ejecutivo para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este régimen comprende la potestad de aplicar multas de hasta cien pesos -cuando no estuviere previsto un monto distinto en norma expresa- mediante resoluciones que, al quedar firmes, tendrán fuerza ejecutiva;

Informalismo

- c) excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente;

Días y horas hábiles

- d) las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren;

Los plazos

- e) en cuanto a los plazos:
  - 1) serán obligatorios para los interesados y para la Administración;
  - 2) se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte;

- 3) se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2 del Código Civil;
- 4) cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez días;
- 5) antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por los menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado;

#### Interposición de recursos fuera de plazo

- 6) una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el superior, salvo que éste resolviera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho;

#### Interrupción de plazos por articulación de recursos

- 7) sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquéllos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente por error excusable;

#### Pérdida de derecho dejado de usar en plazo

- 8) la Administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estudio y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente;

#### Caducidad de los procedimientos

- 9) transcurridos sesenta días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad;

Debido proceso adjetivo

- f) derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:

Derecho a ser oído

- 1) de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas;

Derecho a ofrecer y producir pruebas

- 2) de ofrecer prueba y que ella se produzca si fuere pertinente, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio;

Derecho a una decisión fundada

- 3) que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.

Procedimientos especiales excluidos

Artículo 2. Dentro del plazo de ciento veinte días, computado a partir de la vigencia de las normas procesales a que se refiere el artículo 1, el Poder Ejecutivo determinará cuáles serán los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes. Queda asimismo facultado para:

Paulatina adaptación de los regímenes especiales al nuevo procedimiento

- a) sustituir las normas legales y reglamentarias de índole estrictamente procesal de los regímenes especiales que subsistan, con miras a la paulatina adaptación de éstos al sistema del nuevo procedimiento y de los recursos administrativos por él implantados, en tanto ello no afectare las normas de fondo a las que se refieren o apliquen los citados regímenes especiales;

La presente ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan;

- b) dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos militares y de defensa y seguridad, a propuesta de éstos, adoptando los principios básicos de la presente ley y su reglamentación;

Actuaciones reservadas o secretas

- c) determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como reservadas o secretas las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que deban tener ese carácter, aunque estén incluidos en actuaciones públicas.

## TÍTULO II

### Competencia del órgano

Artículo 3. La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.

### Cuestiones de competencia

Artículo 4. El Poder Ejecutivo resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los Ministros y las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes Ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos Departamentos de Estado.

### Contiendas negativas y positivas

Artículo 5. Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, se declare incompetente, remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se considerasen competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que debe resolverla.

La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará, en ambos casos, sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para la remisión de actuaciones serán de dos días y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de cinco días.

### Recusación y excusación de funcionarios y empleados

Artículo 6. Los funcionarios y empleados pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en los artículos 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiendo dar intervención al superior inmediato dentro de los dos días. La intervención anterior del funcionario o empleado en el expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario, resolverá dentro de los cinco días; si se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de los funcionarios y empleados se registrará por el artículo 30 del Código arriba citado y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los cinco días. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite.

Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.

## TÍTULO III

### Requisitos esenciales del acto administrativo

Artículo 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

Competencia

- a) ser dictado por autoridad competente;

Causa

- b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

Objeto

- c) el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;

Procedimientos

- d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resultan implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos;

Motivación

- e) deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;

Finalidad

- f) habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se registrarán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente Título, si ello fuere procedente.

Forma

Artículo 8. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la forma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

Vías de hecho

Artículo 9. La Administración se abstendrá:

- a) de comportamientos que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales;



- b) de poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.

#### Silencio o ambigüedad de la Administración

Artículo 10. El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa.

Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución se considerará que hay silencio de la Administración.

#### Eficacia del acto: Notificación y publicación

Artículo 11. Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general de publicación. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

#### Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria

Artículo 12. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios ..... -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario.

Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

#### Retroactividad del acto

Artículo 13. El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.

#### Nulidad

Artículo 14. El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos:

- a) cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta;
- b) cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia del territorio, del tiempo o del grado salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

### Anulabilidad

Artículo 15. Si se hubiere incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente o en un vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial.

### Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias

Artículo 16. La invalidez de una cláusula accidental o accesorio de un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.

### Revocación del acto nulo

Artículo 17. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto hubiere generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante declaración judicial de nulidad.

### Revocación del acto regular

Artículo 18. El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado.

Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados.

### Saneamiento

Artículo 19. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante:

#### Ratificación

- a) ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes;

#### Confirmación

- b) confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que le afecte.

Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.

### Conversión

Artículo 20. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiendo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.

### Caducidad

Artículo 21. La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliera las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.

### Revisión

Artículo 22. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme:

- a) cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su aclaración;
- b) cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero;
- c) cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
- d) cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.

El pedido deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto en el caso del inciso a). En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los treinta (30) días de recobrase o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos c) y d).

## TÍTULO IV

### Impugnación judicial de actos administrativos

Artículo 23. Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular:

- a) cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas;
- b) cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto;
- c) cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10;
- d) cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9.

Artículo 24. El acto de alcance general será impugnabile por vía judicial:

- a) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10;
- b) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas.

Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación  
(por vía de acción o recurso)

Artículo 25. La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de noventa días, computado de la siguiente manera:

- a) si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado;
- b) si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria;
- c) si se tratare de actos de alcance general impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa;
- d) si se tratare de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos ocurrieren.

Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta días desde la notificación de la resolución definitiva que agote las instancias administrativas.

Artículo 26. La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

Impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos; plazos

Artículo 27. No habrá plazo para accionar en los casos en que el Estado o sus entes autárquicos fueren actores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

Amparo por mora de la Administración

Artículo 28. El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar condicionalmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados -y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable- sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, si la justicia lo estimare procedente en atención a las circunstancias, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre la causa de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se le establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.

Artículo 29. La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable lo dispuesto por el artículo 17 del decreto ley N° 1285/58.

Reclamo administrativo previo a la demanda judicial

Artículo 30. Fuera de los supuestos previstos en los artículos 23 y 24, el Estado nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo, dirigido al Ministerio o Comando en Jefe que corresponda.

El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en ..... eventual demanda judicial y será resuelto por el Poder Ejecutivo, o por las autoridades citadas si mediare delegación de esa facultad.

Artículo 31. El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco días, podrá iniciar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción.

Artículo 32. El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:

- a) un acto dictado de oficio pudiere ser ejecutado antes de que transcurran los plazos del artículo 31;
- b) antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario;
- c) se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
- d) se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria;
- e) mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil;
- f) se demandare a un ente descentralizado con facultades para estar en juicio.

Artículo 33. La presente ley entrará a regir a los ciento veinte (120) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 34. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

LANUSSE

Carlos A. Rey  
Carlos G. N. Coda  
Ismael E. Bruno Quijano

DECRETO N° 1.759

Buenos Aires, 3.4.72

VISTO Y CONSIDERANDO: lo establecido por la Ley N° 19.549 y lo propuesto por el Señor Ministro de Justicia de la Nación,

EL PRESIDENTE  
DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1. Apruébase el cuerpo de disposiciones adjunto, que constituye la Reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Artículo 2. La reglamentación aprobada entrará a regir a los ciento veinte (120) días de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los trámites administrativos que se inicien de oficio o a pedido de parte, a partir de esa fecha.

Artículo 3. El Ministerio de Justicia convocará de inmediato a los titulares de los distintos servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos para que, reunidos en comisión, propongan cuáles serán los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes. Sus conclusiones serán elevadas al Poder Ejecutivo, juntamente con las normas proyectadas, treinta (30) días antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 2 de la ley.

Artículo 4. Cada uno de los titulares de los servicios jurídicos antes mencionados deberá ir sugiriendo paulatinamente al Poder Ejecutivo, por conducto del Departamento de Estado u organismo de que dependa, las medidas a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la ley. A su vez, los titulares de los servicios jurídicos militares y de defensa y seguridad harán lo propio a través de los Comandos en Jefe de sus respectivas armas y organismos de que dependan, respecto de los procedimientos administrativos a que se refiere el inciso b), del mismo artículo de la ley.

Artículo 5. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

LANUSSE

Carlos A. Rey  
Ismael E. Bruno Quijano  
Carlos G. N. Coda

REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS

TÍTULO I

Órganos competentes

1. Los expedientes administrativos tramitarán y serán resueltos con intervención de los órganos a los que una ley o un decreto hubieren atribuido competencia; en su defecto actuarán los organismos que determine por reglamento interno el Ministerio o cuerpo directivo del ente descentralizado, según corresponda.

Facultades del Superior

2. Los Ministros y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; delegarles facultades; intervenirlos; y abocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior.

Todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes.

Iniciación del trámite. Parte interesada

3. El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.

Los menores adultos tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en la defensa de sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Impulsión de oficio y a pedido de parte interesada

4. Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que medie sólo el interés privado del administrado, a menos que, pese a ese carácter, la resolución a dictarse pudiese llegar a afectar de algún modo el interés general.

Deberes y facultades del órgano competente

5. El órgano competente dirigirá el procedimiento procurando:
- a) tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en estado de resolver. La alteración del orden de tramitación y decisión sólo podrá disponerse mediante resolución fundada;
  - b) proveer en una sola resolución todos los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes;

- c) señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca, ordenando que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades;
- d) disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes interesadas, sus representantes legales o apoderados para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aun para reducir las discrepancias que pudieren existir sobre cuestiones de hecho o de derecho, labrándose acta. En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia.

#### Facultades disciplinarias

6. Para mantener el orden y decoro en las actuaciones, dicho órgano podrá:
- a) testar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos;
  - b) excluir de las audiencias a quienes las perturben;
  - c) llamar la atención o percibir a los responsables;
  - d) aplicar las multas autorizadas por el artículo 1, inciso b) "*in fine*", de la ley, así como también las demás sanciones, incluso pecuniarias, previstas en otras normas vigentes. Las multas firmes serán ejecutadas por los respectivos representantes judiciales del Estado, siguiendo el procedimiento de los artículos 604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
  - e) separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el trámite, intimando al mandante para que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de suspender los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según correspondiere. Las faltas cometidas por los agentes de la Administración se registrarán por sus leyes especiales.

## TÍTULO II

#### De los expedientes: identificación

7. La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite. Queda prohibido asentar en el expediente otro número o sistema de identificación que no sea el asignado por el organismo iniciador.

#### Compaginación

8. Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de doscientas fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto.



COMERCIO EXTERIOR

Decreto N° 766/94

Créase la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Funciones. Integración y Normas de Actuación. Investigaciones, Informes, Dictámenes y Actividades. Disposiciones Generales y Transitorias

Buenos Aires, 12.5.94

VISTO el Código Aduanero (Ley N° 22.415) y su reglamentación, las leyes N° 16.834, de adhesión de la República Argentina al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y N° 24.176, de aprobación del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI y del Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII de dicho Acuerdo General, la Ley N° 20.744, y

CONSIDERANDO:

Que la República Argentina ha instrumentado en los últimos años una política de apertura de la economía consistente en la reducción de los aranceles aduaneros y la eliminación de numerosas barreras no arancelarias, todo ello en un contexto de libertad en la fijación de precios y salarios.

Que tal política ha tenido por objeto aumentar la competencia en el mercado interno argentino y asegurar el abastecimiento de bienes en condiciones similares a las del mercado internacional en lo relativo a precios y calidades.

Que es una función del Gobierno Nacional realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar que los productores radicados en el país no sufran daño material como consecuencia de importaciones en condiciones de competencia desleal, incluyendo las realizadas a precios de dumping y las subsidiadas.

Que, asimismo, suelen producirse situaciones en que hechos ajenos a la política comercial del país y también ajenos a actos de competencia desleal, pueden ocasionar un aumento sensible de las importaciones que hagan recomendable la introducción de medidas de salvaguardia a la producción nacional.

Que en la administración de los instrumentos de política comercial contra prácticas de comercio desleal y las referidas a las medidas de salvaguardia deben buscarse los máximos niveles de eficiencia y transparencia a fin de asegurar que los precios pagados por los consumidores no excedan los que se hubieran observado bajo condiciones de competencia normal en el mercado internacional.

Que los análisis e investigaciones de situaciones de competencia desleal a nivel internacional y de imposición de medidas de salvaguardia, deben realizarse de conformidad con las recomendaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), del que la República Argentina es signataria desde 1965 y en los términos de los Acuerdos aprobados por la Ley N° 24.176.

Que el artículo 3 de dicha Ley y el Artículo 722 del Código Aduanero autorizan a la autoridad de aplicación a delegar en un organismo de su competencia, las funciones relativas a la aplicación de las normas regulatorias sobre competencia desleal internacional, con la excepción de las facultades para dictar resoluciones que establezcan derechos antidumping y compensatorios, que son de la exclusiva competencia del Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Que es conveniente delegar en distintos organismos las facultades de las autoridades de aplicación en materia de investigación del daño material a la producción nacional y de investigación sobre el margen de dumping y de subsidio en las importaciones realizadas en condiciones de competencia desleal, o sobre el aumento sensible de las importaciones, en la evaluación de medidas de salvaguardia.

Que, a tal fin, es conveniente crear un organismo especializado bajo las características de una Comisión Nacional, para que se ocupe de los análisis del daño material a la producción nacional siguiendo, en tal sentido, a la mejor experiencia internacional en la materia, y mantener en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Exterior las investigaciones referidas al margen de dumping y a la tasa de subsidio.

Que dentro de su carácter de organismo especializado en análisis del daño, es conveniente que la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que aquí se crea, se ocupe del estudio permanente de los efectos de la competencia internacional sobre la producción nacional y de la identificación de situaciones que puedan estar previstas en la legislación vigente o que sean de interés de las autoridades económicas.

Que es conveniente que dicho organismo esté facultado también para actuar con carácter asesor de la Secretaría de Comercio e Inversiones dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, dentro de su especialidad, en aquellos aspectos de la Legislación sobre comercio internacional y de la política comercial externa que no se relacionan directamente con las normas del GATT sobre competencia desleal y salvaguardias, pero que involucran aspectos relativos al análisis del daño o amenaza de daño material a la producción nacional.

Que, asimismo, esta Comisión debe actuar como el organismo nacional competente en la materia, en los casos derivados de tratados internacionales.

Que resulta conveniente para el buen funcionamiento de esta Comisión crearla como persona jurídica bajo la figura de un organismo descentralizado.

Que la creación de tales organismos por parte del Poder Ejecutivo Nacional ha sido aceptada, tal como surge de la más autorizada doctrina y de la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Que para alcanzar el logro de los objetivos propuestos, procede encuadrar al personal de la Comisión en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que, asimismo, resulta necesario modificar la distribución administrativa y los créditos vigentes de la Jurisdicción 5000 -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1994, a los fines de posibilitar la puesta en funcionamiento de la Comisión, sin alterar la fuente de financiamiento.

Que han tomado la intervención que les compete el Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Que sus funciones, competencias y modo operativo se integran dentro de la reestructuración de la organización del Estado Nacional en materia de comercio internacional, con la reglamentación de la Ley N° 24.176 y con los acuerdos internacionales que resulten de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en la medida de su adhesión por parte de la República Argentina.

Que el Poder Ejecutivo Nacional es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86, inciso 1) de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA  
NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

## CAPÍTULO I

### Creación y funciones

Artículo 1. Créase la Comisión Nacional de Comercio Exterior como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

La Comisión será la entidad especializada del Gobierno Nacional que actuará como autoridad de análisis, investigación y regulación en la determinación del daño material a la producción nacional en las situaciones previstas en la legislación vigente sobre comercio internacional de la República Argentina.

Artículo 2. La Comisión Nacional de Comercio Exterior tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Su patrimonio estará integrado por los bienes que se le transfieran y por los que adquiriera en el futuro por cualquier título.

Artículo 3. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

- a) conducir las investigaciones y el análisis del daño a la producción nacional, como consecuencia de importaciones realizadas en las condiciones de competencia desleal definidas por el Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en el marco de las leyes y normas reglamentarias que regulan su aplicación en la República Argentina;
- b) analizar el daño que un aumento sensible de las importaciones pudiere ocasionar a la producción nacional y evaluar la conveniencia de introducir medidas de salvaguardia, conforme al Artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en el marco de las leyes y normas reglamentarias que regulan su aplicación en la República Argentina;
- c) analizar, a solicitud de la Secretaría de Comercio e Inversiones, el aspecto del daño a la producción nacional, en oportunidad de la evaluación de medidas de política comercial externa que resulten de la aplicación del Código Aduanero y demás legislación vigente en la materia;
- d) proponer las medidas que fueren pertinentes, bien sean provisionales o definitivas, para paliar el daño en los casos de los incisos anteriores, incluidos los acuerdos voluntarios de precios, así como revisarlas periódicamente y evaluar la conveniencia de su continuidad;
- e) Realizar el seguimiento permanente de las tendencias del comercio internacional y de los efectos de la competencia externa sobre la producción nacional, identificando las situaciones de daño actual o potencial.

- f) aplicar las disposiciones contenidas en tratados internacionales en cuestiones referidas a sus misiones y funciones, actuando como entidad nacional competente en la materia;
- g) realizar los demás estudios, análisis y asesoramiento en materia de sus competencias, o aquellos que específicamente le solicite la Secretaría de Comercio e Inversiones.

Artículo 4. El concepto de daño utilizado en el presente decreto comprenderá a:

- a) un daño o perjuicio importante causado a una producción nacional;
- b) una amenaza de daño o perjuicio importante a una producción nacional;
- c) un retraso sensible en la creación de una producción nacional.

## CAPÍTULO II

### Integración y normas de actuación

Artículo 5. La dirección de la Comisión Nacional de Comercio Exterior será ejercida por un Directorio cuyos miembros tendrán rango de Subsecretario y estará integrado por un (1) Presidente y cuatro (4) vocales, cuyas remuneraciones se indican en el Anexo I al presente decreto, los que serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Los vocales durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser renovada su designación.

Artículo 6. Los miembros del Directorio de la Comisión deberán ser ciudadanos argentinos y acreditar idoneidad, antecedentes profesionales y de actuación en cuestiones de economía, derecho y de comercio exterior, que aseguren el eficaz desempeño de las tareas a su cargo.

Será incompatible el cargo de miembro del Directorio, sin perjuicio de los demás casos establecidos por la legislación para los funcionarios públicos, con:

- a) el desempeño de otra actividad remunerada en cualquier repartición de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial, salvo la docencia y comisiones de estudio;
- b) otros cargos, tareas o asesoramientos profesionales en asuntos vinculados directa o indirectamente con personas que se hallan o pudieren hallarse incurso en las prácticas o situaciones tratadas por el presente decreto;
- c) representaciones, patrocinio o gestiones judiciales o extrajudiciales frente al Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades o cualquier otro organismo oficial.

Artículo 7. Los vocales sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo Nacional por causa grave, previa sustanciación del procedimiento que asegure la garantía del debido proceso. El Poder Ejecutivo Nacional podrá remover al Presidente, no siendo requerida causa para hacerlo.

Artículo 8. Les está prohibido a los miembros del Directorio y al personal de la Comisión mantener conversaciones o negociaciones vinculadas con una investigación en curso fuera del respectivo expediente, con personas que tengan interés en la causa. El incumplimiento de esta norma será pasible de despido con causa respecto al personal, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder por la legislación general.

Artículo 9. Serán funciones del Directorio:

- a) interpretar y aplicar las normas a las que se refiere el artículo 3 del presente decreto, dentro de las competencias de la Comisión;
- b) formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la Comisión;
- c) aprobar anualmente la memoria y balance, previo a su presentación a los organismos de control correspondientes;
- d) realizar todos los demás actos asignados específicamente a la Comisión y en general los otros que fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones de la misma y los objetivos del presente decreto.

Artículo 10. El Presidente tendrá a su cargo las funciones administrativas de la Comisión y ejercerá la representación legal de la misma; en caso de impedimento o ausencia transitoria será reemplazado por uno de los vocales designado a tal fin por el Directorio.

La designación, promoción, suspensión y remoción del personal corresponderá al Presidente de la Comisión.

Artículo 11. Salvo para adoptar decisiones referidas a los artículos 14, 19, 21 segundo párrafo y 22 del presente decreto, en los que se requerirá la presencia de todos los miembros, el Directorio podrá sesionar con tres (3) de sus integrantes como mínimo, adoptándose las decisiones por mayoría de votos de los presentes. En caso de empate en una votación, el voto del Presidente se computará doble.

### CAPÍTULO III

#### Investigaciones, informes, dictámenes y actividades

Artículo 12. En las investigaciones referidas a importaciones en condiciones de competencia desleal, los informes deberán contener, al menos, la siguiente información:

- a) descripción de la industria y de su situación internacional;
- b) evolución de los factores determinantes de la relación entre importaciones realizadas en condiciones de competencia desleal y el daño a la producción nacional, en particular:
  - I) valor y volumen físico de las importaciones realizadas en condiciones de competencia desleal;
  - II) efectos que estas importaciones han tenido sobre los precios en el mercado local;
  - III) efectos de estas importaciones sobre aspectos tales como el empleo de mano de obra, capacidad utilizada, tasa de retorno de la inversión y otros aspectos que pudieren ser indicadores de daño;
  - IV) efectos de otros factores sobre la situación competitiva de la industria, incluyendo factores cíclicos, capacidad empresarial, regulaciones y cualquier otra causa independiente del comercio desleal que pudiere ser determinante de la misma;

- V) perspectivas de evolución del mercado en ausencia de medidas compensatorias;
- VI) comportamiento probable del mercado luego de la aplicación de las medidas recomendadas. Efectos de la misma sobre los consumidores.

La prueba del daño a la producción nacional deberá fundarse en hechos e información objetiva y no en meras conjeturas o posibilidades remotas.

- c) recomendación acerca de la conveniencia de aplicar o mantener regulaciones comerciales bajo la forma de derechos antidumping o compensatorios para contrarrestar el daño a la producción nacional.

Artículo 13. En las investigaciones relativas a la evaluación de medidas de salvaguardia, los informes deberán contener, al menos, la siguiente información:

- a) relación de los hechos que han motivado la investigación y descripción de la industria y de su situación internacional;
- b) relación de los factores demostrativos del daño a la producción nacional, tales como las importaciones, el empleo de mano de obra, la capacidad industrial utilizada, la tasa de retorno de la inversión y cualquier otro que permita una adecuada evaluación;
- c) incidencia económica para los consumidores, derivadas de la aplicación de medidas de salvaguardia;
- d) recomendación sobre las medidas de salvaguardia más apropiadas al caso.

Artículo 14. La Comisión podrá aprobar y publicar guías, ejemplos e instrucciones de detalle relativas a las investigaciones, con la finalidad de informar al público y a los interesados acerca de las modalidades y características de sus análisis, de los informes y de sus recomendaciones.

Artículo 15. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá realizar las contrataciones de especialistas o de consultorías especiales con sujeción a las normas vigentes, que fueren necesarias como complemento de su equipo técnico estable. Asimismo, podrá realizar convenios de cooperación técnica con organismos del país o del extranjero, especializados en áreas afines a sus funciones.

Artículo 16. En el análisis y recomendación de medidas, la Comisión deberá orientarse con el criterio de contrarrestar el daño y deberá evitar la utilización de la normativa con fines proteccionistas. En particular, no deberá proponer medidas similares a las estimadas por la Subsecretaría de Comercio Exterior si concluye que el daño puede subsanarse con otras que restrinjan menos las importaciones. En ningún caso, los derechos propuestos podrán ser más elevados que el margen de dumping o la tasa de subsidio estimados por la Subsecretaría de Comercio Exterior.

Artículo 17. La Comisión podrá requerir todos los datos e informaciones que considere relevantes para completar las investigaciones en curso, siendo de aplicación en su caso lo dispuesto por el Artículo 707 del Código Aduanero. Asimismo podrá realizar investigaciones en otros países cuando las circunstancias lo requieran.

Artículo 18. En caso de resultar conveniente para la marcha de las investigaciones, la Comisión podrá llamar a audiencias con la participación de las partes interesadas.

Artículo 19. Las decisiones sobre las investigaciones en curso, serán adoptadas por el Directorio de la Comisión en sesiones convocadas a tal efecto con la presencia de todos sus miembros. De cada

sesión se labrará acta donde consten los votos de los directores, sus fundamentos, y la decisión final que resulte aprobada, la que será notificada al Secretario de Comercio e Inversiones.

Las decisiones deberán ser aprobadas por el voto fundado de la mayoría del Directorio y también deberán presentarse las opiniones de la minoría.

Artículo 20. Los informes de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y las decisiones de su Directorio, son el único medio para acreditar la existencia o inexistencia de daño a la producción nacional en los casos referidos a importaciones en condiciones de competencia desleal y a la evaluación de medidas de salvaguardia.

Cuando la Comisión concluya que no existe daño, el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos no tomará medidas en relación a las importaciones.

En los casos en que la Comisión encontrare daño suficiente para justificar medidas, sus recomendaciones en lo relativo al nivel de los derechos antidumping y compensatorios y acerca de la adopción de medidas de salvaguardia, tendrán el carácter de asesoramiento al Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

#### CAPÍTULO IV

##### Disposiciones generales y transitorias

Artículo 21. La Comisión deberá cumplir sus funciones dentro de los plazos establecidos por la legislación a la que se refiere el artículo 3 del presente decreto, debiendo coordinar su actividad con el curso de las investigaciones que realice la Subsecretaría de Comercio Exterior y expidiendo sus informes en tiempo oportuno para no entorpecer los trámites, medidas procesales y resoluciones que correspondan.

La Comisión dictará su reglamento interno y tendrá facultades para dictar normas de interpretación y aclaración relativas a las materias de su competencia, así como en lo relativo a las formas, plazos y demás modalidades de procedimiento interno, todo ello conforme con la legislación vigente.

Artículo 22. La Comisión deberá adoptar recaudos para proteger la información confidencial, en lo relativo a su manejo y conservación, y establecerá las responsabilidades y sanciones que correspondan al personal que viole las normas que se fijen sobre el particular.

Artículo 23. Una vez cada seis (6) meses, la Comisión dará a publicidad un resumen de las actividades cumplidas, así como todo otro dato adicional sobre medidas adoptadas por terceros países respecto de las exportaciones efectuadas por la República Argentina.

Anualmente, se confeccionará y publicará el Informe Anual de la Comisión.

Artículo 24. Para renovar en forma gradual el Directorio, el Poder Ejecutivo Nacional establecerá al momento de constituirlo por primera vez, los cargos de dos (2) vocales que se renovarán al cabo del segundo año.

Artículo 25. Deléganse en la Comisión Nacional de Comercio Exterior las funciones a las que se refieren el Artículo 722 del Código Aduanero (Ley N° 22.415) y el Artículo 3 de la Ley N° 24.176, con las limitaciones establecidas en los mismos, dentro de las competencias y funciones acordadas en el presente decreto y en el marco de las reglamentaciones que regulen la aplicación de dichas leyes. La delegación efectuada a la Subsecretaría de Comercio Exterior por la Resolución N° 104

de fecha 24 de mayo de 1989 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, queda limitada a las funciones no asignadas por el presente a la Comisión Nacional de Comercio Exterior. La Secretaría de Comercio e Inversiones, a solicitud de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y considerando el proceso de puesta en funcionamiento de la nueva entidad, establecerá la fecha a partir de la cual se hará operativa esta delegación.

Artículo 26. La Comisión Nacional de Comercio Exterior elevará al Poder Ejecutivo Nacional para su aprobación, dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del presente decreto, la estructura organizativa del organismo, con el criterio de conformar un grupo especializado y altamente calificado. La relación laboral del Personal se encuadrará en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1986) y sus modificatorias.

Artículo 27. Hasta tanto se apruebe la estructura organizativa de la Comisión, asígnase al Presidente y a los Vocales de la misma los cargos de Asesores de Gabinete previstos en el artículo 1 del Decreto N° 736/92 para los Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, quedando sujetos dichos Asesores al Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la Ley N° 22.140 y su reglamentación, en lo que les corresponda.

Artículo 28. Modifícase la distribución administrativa del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 1994 -Recursos Humanos- de la Jurisdicción 5000 -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Programa 17- Definición de Políticas de Inversiones, Comercio y Servicios Públicos y Programa 21 -Regulación de los Servicios Postales, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo que forman parte integrante del mismo.

Artículo 29. Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 1994, en la parte correspondiente a la Jurisdicción 5000 -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Programa 17- Definición de Políticas de Inversiones, Comercio y Servicios y Programa 21 -Regulación de los Servicios Postales, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo que forman parte integrante del mismo.

Artículo 30. Los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Comercio Exterior se imputarán durante el Ejercicio 1994 al presupuesto de la Secretaría de Comercio de Inversiones, conforme a los montos establecidos en las planillas anexas al artículo 29 del presente decreto, debiendo preverse en el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 1995 la incorporación de los cargos y créditos correspondientes a la entidad que se crea.

Artículo 31. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MENEM. Domingo F. Cavallo.

---

Nota: Las planillas anexas a los artículos 28 y 29 no se publican.



ANEXO I

Comisión Nacional de Comercio Exterior

Escala salarial

Cargos	Sueldo	Dedicación funcional	Suplemento Función Directiva*	Total
Presidente	1.900	1.900	4.000	7.800
Vocales	1.900	1.900	3.000	6.800

\* No remunerativa y no bonificable.